

Perú. Más allá de la toma de rehenes

Carlos Iván Degregori

Carlos Iván Degregori: antropólogo peruano, investigador del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, y profesor de la Universidad de San Marcos, Lima. Actualmente es investigador visitante del inter-American Dialogue, Washington, D.C.

Palabras clave: MRTA, Fujimori, terrorismo, Perú

El comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que asaltó la residencia del embajador del Japón el 17 de diciembre de 1996, tomó totalmente por sorpresa no sólo a los centenares de invitados que celebraban el onomástico del emperador Akihito, sino a todo el Perú.

El año 1996 había sido el año político más complejo desde 1992. En las encuestas de opinión, la popularidad del gobierno de Alberto Fujimori había ido declinando lentamente hasta que en noviembre, por primera vez en seis años, el porcentaje de los que desaprobaban la gestión presidencial superó al de quienes la aprobaban. Es cierto que conservar más de 40% de aceptación después de tantos años constituye un récord no sólo en el Perú sino en cualquier país de América Latina. Sin embargo, también por primera vez en el sexenio, en diciembre el gobierno aparecía claramente a la defensiva. Una recesión económica persistente y una creciente desilusión respecto del modelo económico erosionaban su popularidad¹.

Más aún, en el contexto de crisis económica la confrontación como método para alcanzar sus objetivos comenzaba a resultar contraproducente. Así, a lo largo del año, la mayoría de la opinión pública tomó consistentemente partido por el alcalde de Lima, Alberto Andrade, en su desigual enfrentamiento con el gobierno central². Por otro lado, un gobierno que no era percibido como corrupto por las mayorías, se vio implicado en el proceso judicial al más importante narcotraficante peruano, apodado «Vaticano», quien acusó a Vladimiro Montesinos, principal asesor presidencial y jefe informal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de recibir dinero del narcotráfico. Cuando los ecos

¹ En 1994, el PIB creció más de 12%, récord mundial para ese año. En 1995 la cifra bajó a 6% y en 1996 a sólo 2%. Peor aún, ni en el mejor momento el crecimiento llegó a «gotear» lo suficiente hacia los estratos más pobres.

² El independiente Alberto Andrade asumió la alcaldía de Lima en enero de 1996 después de derrotar en las elecciones municipales a Jaime Yoshiyama, candidato del gobierno y hasta entonces heredero aparente del presidente Fujimori. Desde entonces, el gobierno central se empeñó en recortar las atribuciones de la alcaldía con el fin de asfixiar la gestión del alcalde y eliminarlo como posible rival en las elecciones del año 2000.

de este escándalo aún no se habían extinguido, personal del SIN apareció implicado en atentados contra miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, contra estaciones de TV, así como en el arresto injustificado del general (r) Rodolfo Robles³.

En una coyuntura tan favorable, parecía que la oposición comenzaba a salir después de mucho tiempo de su catalepsia, articulándose alrededor de la realización de un referéndum que impidiera la postulación de Fujimori a una nueva reelección en el año 2000.

Y entonces, súbitamente, el MRTA irrumpió de modo espectacular en ese complejo escenario, reconfigurando en apenas 10 minutos la ubicación de los actores, forzando a la oposición a cerrar filas en defensa del Estado y en contra del terror y contribuyendo, como advirtieron las encuestas publicadas a un mes de iniciada la crisis, a la recuperación de la popularidad presidencial por primera vez en el año.

El MRTA

¿Quiénes eran los asaltantes de la residencia del embajador del Japón? Si bien sus antecedentes inmediatos se encuentran en los años de la transición democrática peruana (1978-80), los orígenes del MRTA se remontan a las guerrillas del MIR, de inspiración procubana, en 1965. Quince años más tarde, algunas de las fracciones en que quedó dividido dicho movimiento decidieron no incorporarse al escenario democrático abierto por la transición y seguir preparando «el reinicio de la lucha armada». En ese camino se encontraron con un pequeño grupo supérstite del que había sido el ala más radical del gobierno del general Velasco (1968-75). De esa conjunción nació en 1983 el MRTA, alentado por acontecimientos que conmocionaron a la izquierda radical: el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y la ofensiva guerrillera en El Salvador y Guatemala; el auge de la lucha antidictatorial en los países del Cono Sur; así como también los éxitos iniciales de Sendero Luminoso en el Perú⁴.

Desde un principio, el MRTA apareció apretujado entre Izquierda Unida (IU), por esos años la izquierda legal más grande de América del Sur, y la «máquina de guerra» senderista. Sin la base social de la una ni la ferocidad y disciplina del

³ Robles saltó a la fama cuando denunció la existencia de un grupo paramilitar dentro del Ejército, responsable, entre otros, del asesinato de nueve estudiantes y un profesor en la universidad limeña La Cantuta en 1992. Días antes de su arresto, Robles había denunciado en un canal de televisión a miembros del SIN como responsables de atentados contra miembros del Tribunal de Garantías y una estación repetidora de ese mismo canal.

⁴ Tanto Sendero Luminoso como el MRTA iniciaron acciones armadas *después* de la transición democrática (1978-80), que coincidió con el auge más importante de organización y movilizaciones sociales en el Perú del siglo XX. Tal vez porque ninguno de los dos grupos se articuló de manera significativa con esos movimientos. Así, si bien toda la izquierda fue impactada por la lucha armada en América Central, en los partidos que por esos años conformaron Izquierda Unida, la influencia llegó tamizada por una dinámica social que no apuntaba precisamente a la generalización de las confrontaciones violentas.

otro, trató de diferenciarse de ambos presentándose como la «guerrilla buena», repartiendo víveres en los barrios pobres de Lima o bailando con los habitantes de los pueblos en los cuales incursionaba. Con los años, sin embargo, la lógica de la guerra se fue imponiendo y la imagen inicial se fue desdibujando. Después de casi una década, sus más grandes lauros eran la toma por breves horas de algunas capitales provinciales y el espectacular escape de medio centenar de emerretistas de una cárcel de Lima a través de un túnel. Hacia principios de esta década, el cambio en la estrategia de las fuerzas armadas peruanas terminó de arrinconarlos. Para 1992, los más importantes líderes fugados habían sido recapturados. El golpe de gracia lo constituyó la capitulación del Frente Nor-Oriental, cuyos principales líderes se acogieron a la Ley de Arrepentimiento promulgada poco antes por el gobierno⁵.

A estos golpes se sumó el fin de la Guerra Fría, la crisis de la utopía socialista y la decisión de los movimientos armados centroamericanos de entablar negociaciones de paz. El MRTA terminó como superviviente de un capítulo previo de la historia de América Latina y culminó una evolución que venía de tiempo atrás, convirtiéndose en un grupo especializado en secuestros y golpes de mano, contaminado por el narcotráfico, resolviendo repetidas veces sus disputas internas por medio del asesinato. Derrotados estratégicamente, los dirigentes nacionales todavía en libertad se ensimismaron en la preparación de dos golpes de mano: la toma del Congreso, que abortó en noviembre de 1995, y la toma de la residencia del embajador japonés, con la cual regresaron casi literalmente de ultratumba al escenario nacional e internacional.

Los rehenes, el azar y los errores

¿Cómo pudo un grupo tan débil realizar una operación tan exitosa? Aparte del azar en la historia, cabe señalar que hoy en día ataques terroristas y golpes de mano similares pueden producirse casi en cualquier parte del mundo: bombas en Oklahoma y en el World Trade Center de Nueva York, gas nervioso en el metro de Tokio, bombas en el metro de París, un escape cinematográfico de una prisión chilena de alta seguridad pocos días después de la acción del MRTA en Lima. Pero que algo semejante pueda suceder en cualquier parte no elimina responsabilidades, que pueden advertirse antes y después de producida una acción de este tipo. Antes: minimizando riesgos. Después: maximizando el «control de daños».

Antes. Minimizar el riesgo de que se produzcan acciones como las del pasado 17 de diciembre, especialmente si se quiere hacerlo respetando los marcos democráticos, requiere hoy más que nunca servicios de inteligencia y fuerzas policiales altamente profesionales, tecnificadas y no politizadas. No era el caso

⁵ El denominado Frente Nor-Oriental del MRTA cubría principalmente el departamento amazónico de San Martín y era casi el único lugar donde el grupo armado tenía cierta presencia en organizaciones sociales como la Federación Campesina y el Frente de Defensa de ese departamento.

del Perú, donde después de la derrota militar de SL y el MRTA las fuerzas de seguridad bajaron la guardia y se concentraron en objetivos políticos, específicamente en asegurar la reelección del presidente Fujimori en el año 2000. Así, en vez de perseguir a los restos del MRTA y SL, se dedicaron a montar operativos de inteligencia contra la alcaldía limeña, contra periodistas, personalidades y medios de comunicación opositores.

Después. En lo referente al «control de daños» y la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, hasta el momento de redactar este artículo el balance resulta frágilmente favorable al gobierno. El gobierno, y el país, han sido capaces de asimilar el golpe. No estamos en 1992. El Estado se ha fortalecido y el ánimo de la población, a pesar de las dificultades de 1996, es también diferente. Pero la crisis ha revelado también, esta vez en una situación límite, la naturaleza extremadamente centralizada y personalizada del régimen.

Cuando la nube de periodistas de todo el mundo llegó a Lima, encontró que no existía un portavoz oficial del gobierno y tuvo que esperar varios días hasta que el propio presidente se dirigiera al país. Un «equipo de crisis» a cargo del manejo del problema se formó mucho más rápido en Tokio que en Lima. Si en el Perú existió uno desde el principio, debe haber estado conformado por los sospechosos de siempre, actuando en el secreto de costumbre.

El gobierno mostró asimismo su dificultad para convocar y movilizar al conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas en torno a intereses nacionales. Cuando convocó a movilizaciones por la paz y la liberación de los rehenes, lo hizo en términos estrictamente partidarios. Habitantes de los «Conos» de Lima, beneficiarias de programas como el Vaso de Leche, marchaban a la residencia con banderolas anaranjadas y eslóganes como *Estamos con el señor Presidente o Estamos con el Chino*, que revelaban, otra vez, la naturaleza personalizada de la adhesión⁶.

Finalmente, pese a que la oposición expresó su disposición a una tregua política, el gobierno decidió jugar el papel de los políticos tradicionales –mezquinos e inmediatistas– que siempre criticó. En plena crisis, con los ojos del mundo puestos sobre Lima, la mayoría parlamentaria continuó su ofensiva contra instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

El contexto global

Sin embargo, en el manejo específico de la crisis de los rehenes, la acción gubernamental ha sido prudente. Desde su primer mensaje al país, el presidente abrió el camino a una solución pacífica al proponer la formación de una comisión de garantes. A partir de allí, con altibajos, se ha avanzado de la

⁶ Naranja es el color de Cambio 90, el movimiento con el cual el ingeniero Alberto Fujimori ganó la presidencia en 1990, hoy indistinguible del Estado.

incertidumbre a la precisión de ciertos marcos dentro de los cuales es posible trabajar un desenlace incruento.

En esta evolución positiva ha jugado un papel importante la comunidad internacional. El fin de la Guerra Fría, el colapso del bloque soviético y los procesos de paz en América Central han dejado sin posibilidad de respaldo internacional a grupos como el MRTA. El apoyo de los países latinoamericanos y del Grupo de los Siete es un activo invaluable para el gobierno.

Comprensiblemente, Japón ha sido el principal protagonista extranjero y el que ha ejercido mayor presión a favor de una solución pacífica. En los primeros días del conflicto, la llegada del ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de un numeroso equipo de asesores, parece haber tenido influencia decisiva en bloquear la posibilidad de un asalto a la residencia, formalmente territorio japonés. Luego de la partida del canciller, el embajador Terada, representante nipón en México, permaneció en Lima a la cabeza de un equipo para monitorear lo que para Japón es la mayor crisis diplomática después de 1945 a nivel mundial y el operativo más importante de todos los tiempos en América Latina. La reunión celebrada en Toronto el 1º de febrero de 1997 entre Fujimori y el primer ministro japonés, Rytishiro Hashimoto, así como la inclusión de Terada como observador en las conversaciones entre el gobierno y el MRTA, subrayan este papel.

Más allá de la residencia

¿Cuál será el impacto del golpe de mano emerretista, para el gobierno y para el país en general? Depende, por cierto, del resultado final de la actual crisis, que al momento de escribir estas líneas continúa. Un desenlace violento reabriría heridas y sería desastroso, no sólo para el gobierno sino para un país que apenas comienza a recuperarse de la década más violenta que vivió en el presente siglo.

Si apostamos por un final incruento⁷, evaluar las repercusiones posteriores requiere ponderar el peso de los actores que hoy se enfrentan. El MRTA jugó su única y posiblemente última carta con gran habilidad. El asalto fue militarmente

⁷ Una salida pacífica y política a la crisis, dentro de los marcos de la legalidad, es posible y necesaria. Necesaria, porque una perspectiva democrática requiere que el capítulo final de una guerra interna sea un capítulo político, por más débil que sea el adversario. La prueba de que no basta la derrota militar la dan tanto el surgimiento del MRTA como la reciente toma de rehenes. Siendo el MRTA un grupo aislado socialmente, no cabe una solución «a la Centroamericana». No hay interlocutor válido para un Acuerdo como los firmados en Guatemala o El Salvador. Pero es posible entablar la negociación con el MRTA como un hecho político y encontrar puntos que, sin violar la legalidad, permitan la liberación de los rehenes y, de ser posible, la renuncia del MRTA a la lucha armada y su reubicación como actor político. Puntos como la salida del país de los asaltantes, la mejora de las condiciones carcelarias para los emerretistas presos, posibles revisiones de penas e incluso una amnistía dentro de varios años para quienes no hayan estado involucrados directamente en hechos de sangre, siempre y cuando el MRTA renuncie a la violencia, podrían ser considerados.

impecable. En las semanas siguientes se las arregló para mantener la iniciativa política, especialmente de cara a los medios, tratando a los rehenes de manera benévola y liberando algunos en coyunturas estratégicas. Pero la única carta terminó por gastarse, especialmente cuando la atención de la prensa internacional y de la opinión pública nacional comenzó a decaer⁸.

Por su parte, luego de superar el desconcierto de los primeros días, el gobierno comenzó a jugar sus cartas. El presidente reanudó sus viajes fuera de la capital, opositores y gobiernistas comenzaron a retomar el hilo del debate político y la residencia con rehenes y asaltantes quedó como un hecho aislado. Esa sensación se acentuó con la visita del entonces presidente Bucaram a Lima a mediados de enero y los viajes de Fujimori a Toronto y Londres en febrero.

De esta forma, el MRTA consiguió lo que los estrategas del gobierno no habían logrado en todo 1996: la recuperación de la imagen presidencial⁹. Es que en los últimos dos años, especialmente a partir de la derrota estratégica de SL, el problema de orden y seguridad había perdido importancia, mientras que las preocupaciones económicas saltaban al primer plano. Incluso, en medio de la crisis económica, los rasgos autoritarios del gobierno, tolerados mientras la insurgencia aparecía amenazante, comenzaban a volverse crecientemente incómodos. El MRTA volvió a poner a la orden del día la seguridad, dándole al presidente la oportunidad de jugar una vez más su papel de líder firme contra el terrorismo.

El gobierno se encuentra, sin embargo, en una situación extraña. Si la actual crisis tiene un final violento, pierde él solo. Si tiene un final pacífico y sin liberación de presos emerretistas, ganan todos: gobierno, oposición, prensa, opinión pública, iglesias, comunidad internacional, en fin, todos los que abogaron y pugnaron por una salida incruenta. Más aún, en el mediano plazo, por lo mismo que se trata de un grupo pequeño que perpetra un hecho aislado (aun cuando espectacular), las angustias económicas –y en menor medida el autoritarismo– volverán al primer plano de las preocupaciones.

Eso se deduce de la mencionada encuesta de Imasen. Cuando preguntan cuáles son los tres principales problemas del país, el desempleo encabeza la lista con un 77,5% de menciones, seguido por la crisis económica (37,3%), la pobreza (30,3%), la delincuencia (19%) y sólo después de ella el terrorismo con (18,3%). Los «problemas no solucionados en la embajada» aparecen bastante rezagados con un 5,5% de menciones. Todavía más, la oposición mayoritaria a la reelección del presidente el año 2000 permanece casi invariable con un

⁸ El último episodio en el cual el MRTA resultó el gran protagonista, tuvo lugar el 5 de enero de 1997, cuando los periodistas que rodeaban la residencia tomada, encabezados por un japonés, penetraron en el local y entrevistaron a Cerpa Cartolini, jefe del comando y del MRTA.

⁹ Diferentes encuestadoras coincidieron en que el presidente había recuperado entre 6 y 12 puntos de popularidad entre diciembre y enero. Imasen, que encontró 42% de aprobación presidencial en diciembre, midió 50,3% de aprobación a un mes de iniciada la crisis.

66,3%, frente a sólo un 28% que la respalda. Por último, la imagen del SIN y de las fuerzas armadas, bastiones de respaldo político al presidente, se ha visto también afectada por el asalto a la residencia japonesa. Preguntados sobre «el aspecto más decisivo que ha permitido que el MRTA tome la residencia del embajador del Japón», la «falta de seguridad policial» (28,3%) y «las fallas del SIN» (22,5%), compiten con «la habilidad del MRTA» (27%), como las tres principales explicaciones. En ese sentido, el 17 de diciembre de 1996 quedó irreversiblemente desacreditada la reiterada promesa de Fujimori de acabar con el terrorismo en 1995.

Lo que le queda por delante al gobierno es una lucha cuesta arriba por revertir la recesión económica, esperando a que las inversiones extranjeras comiencen a rendir frutos hacia 199899, justo a tiempo para tener los fondos suficientes como para «hacer obras» y reconquistar votos antes de las elecciones del 2000. Porque si algo ha demostrado la actual crisis es que al modelo político peruano vigente le resulta indispensable la reelección permanente de Fujimori. Veamos por qué.

Según O'Donnell, los caudillos que encabezan las democracias delegativas prefieren los movimientos a los partidos. Fujimori no tiene ni uno ni otro. Nueva Mayoría-Cambio 90 (NM-C90), la agrupación por la cual postuló a la reelección en 1995, no es una alianza de movimientos sino una combinación de siglas, y lo seguirá siendo por voluntad de su fundador y jefe único. Las elecciones de 1995 marcaron asimismo la desaparición legal de todos los partidos políticos, pues ninguno alcanzó el 5% de votos estipulado por la nueva Constitución para conservar su inscripción en el Jurado Electoral. Unión por el Perú, la formación encabezada por Javier Pérez de Cuéllar que ocupó el segundo lugar en la votación, nunca fue más que un conglomerado de personalidades sin ninguna institucionalidad.

Sin embargo, lo que sorprende en el caso peruano es la mezcla de durabilidad del modelo y fragilidad de las instituciones democráticas; de incremento de la gobernabilidad y encogimiento de la democracia representativa, todo en un contexto de permanente inequidad. Si el equilibrio de poderes y la existencia de un sistema de partidos forman parte de la columna vertebral de un sistema democrático y/o de la gobernabilidad democrática, he aquí este cuerpo político invertebrado que se mantiene en pie y es capaz de resistir crisis como la actual. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, la cabeza continúa funcionando. Nos referimos al Ejecutivo, más precisamente al presidente, todopoderoso y ubicuo, siempre en campaña, con un Ministerio de la Presidencia en constante crecimiento, que fagocita las funciones de otros ministerios del sector social y que resulta extremadamente útil en periodos electorales. En segundo lugar, el cuerpo invertebrado camina gracias a la existencia de un conjunto de instituciones y personajes que lo sostienen por arriba, por los costados, por detrás y por debajo, formando una suerte de exoesqueleto que reemplaza la columna vertebral hecha polvo.

Desde arriba, gobiernos, agencias y organismos internacionales contribuyen a llevar adelante la reforma económica y la reforma del Estado, y vigilan la existencia de mínimos democráticos: elecciones, libertad de prensa, la existencia formal del Legislativo, etc. A sus costados, las fuerzas armadas y la comunidad empresarial apoyan entusiastamente al gobierno. Las FFAA tienen hoy una presencia nacional que va mucho más allá de lo que se puede considerar la misión de los institutos armados en un sistema democrático. La victoria sobre SL y la reciente guerra contra el Ecuador (1995) han legitimado su papel y sus privilegios institucionales. Por su parte, aun cuando los industriales y los exportadores expresan su disconformidad con la política económica, la comunidad empresarial se alinea hasta el momento mayoritariamente con el modelo. Por detrás, con frecuencia literalmente detrás de las cortinas, tecnócratas y asesores que no son responsables ante nadie excepto el presidente, han reemplazado a los intelectuales y a los ideólogos, que parecen no ser más necesarios, como tampoco lo son el militante y el votante fiel, según anotan Grompone y Mejía¹⁰. Estos «poderes fácticos» son legitimados y sostenidos desde abajo, por una opinión pública que hasta principios de 1996 respaldaba al gobierno con tasas que superaban a veces el 70% de aprobación. El país ha pasado así de los movimientos sociales con agenda propia de las décadas previas a una opinión pública más vaga, pero que mantiene cierta racionalidad autónoma y ocasionalmente capacidad de veto sobre algunas decisiones del Ejecutivo¹¹.

Uno de los límites centrales del modelo es que la cabeza, que juega un papel decisivo, es única e intransferible¹². Esto condena al presidente a un activismo frenético, a estar siempre en campaña y en última instancia a la reelección perpetua. Pero al mismo tiempo, la naturaleza «invertida» del modelo le permite asimilar fácilmente los golpes dirigidos a un «Sistema político» amorfo. Hasta el momento, los golpes contundentes han sido aquellos dirigidos directamente a la cabeza, o a los poderes fácticos que la sustentan¹³. Esto hace

¹⁰ Romeo Grompone y Carlos Mejía: Nuevos tiempos, nueva política. El fin de un ciclo partidario, IEP, Lima, 1995.

¹¹ Ese poder de veto debe haber influido también, en alguna medida, en la opción del gobierno por una salida negociada a la toma de rehenes. En la encuesta de Imasen, sólo un 13,5% se manifiesta a favor de «un rescate a cargo de fuerzas especializadas» como forma de solucionar la crisis.

¹² Esto se comprobó en las pasadas elecciones inunicipales, cuando el único heredero aparente de Fujimori, Jaime Yoshiyama, cuyo slogan era: «Con todo el apoyo» (¡y lo tuvo!) resultó derrotado por Alberto Andrade.

¹³ En este sentido, cabe referirse a un episodio previo. En noviembre de 1995 fue apresado Miguel Rincón, el otro dirigente nacional del NIRTA que se encontraba todavía libre, a la cabeza de un comando que preparaba un asalto al Congreso. Paradójicamente, de haber tenido éxito, Rincón hubiera recargado de simbolismo una institución que el actual gobierno se ha encargado de despojar sistemáticamente de todo poder político y contenido simbólico, con la cooperación entusiasta de la mayoría parlamentaria. En ese sentido, la toma de la residencia del embajador japonés tuvo mayor impacto, no sólo por sus repercusiones internacionales sino por la indiferencia que hoy produce el Congreso entre la mayoría de peruanos.

muy difícil la tarea de la oposición democrática y, paradójicamente, termina abriéndole un espacio a la protesta extrasistémica. Que hoy el MRTA no haya logrado simpatías no significa que en el futuro, si la situación se deteriora y la oposición democrática no se convierte en alternativa viable, otras protestas extrasistémicas, incluso violentas, puedan conseguir apoyo en ciertos sectores. Para impedirlo, y para evitar la reelección de Fujimori, la oposición democrática deberá trepar una cuesta todavía más empinada, elaborar alternativas, construir organizaciones y perfilar candidatos que la ayuden a salir de su interminable marasmo.

Regresando a la actual crisis, lo mejor para el país sería que, más allá del desenlace incruento, este incidente fuera el catalizador para un «acuerdo de paz» entre los peruanos. En otras palabras, para que el gobierno, los partidos políticos y la sociedad reconozcamos que hay una agenda pendiente de paz, derechos humanos, justicia social y democracia en el país; que no se puede abrir un nuevo capítulo sin una reflexión sobre uno de los periodos más violentos de nuestra historia; que no es posible, por tanto, pretender ser «jaguar» en el siglo XXI sin saldar cuentas con nuestros propios demonios, que se desencadenaron de manera tan brutal en la década de 1980.

Washington, marzo de 1997